

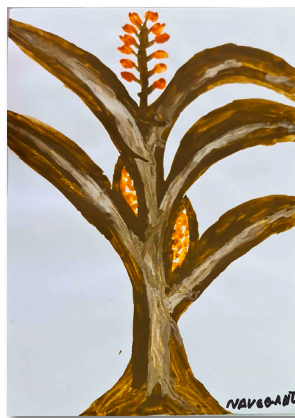
Saberes campesinos: La milpa en el cráter de Xico, México

JULIETA MARTÍNEZ CUERO

SILVIA IVETH MORENO GAYTÁN

RESUMEN: El artículo analiza la relevancia de los conocimientos tradicionales de pequeños productores campesinos frente a la crisis del campo mexicano y la inseguridad alimentaria. A partir del caso del cráter de Xico, Valle de Chalco, se evidencia el impacto de las políticas públicas y la resistencia campesina para mantener la producción de maíces nativos mediante prácticas agroecológicas que articulan saberes tradicionales y nuevas estrategias en territorios periurbanos del Valle de México.

PALABRAS CLAVE: Políticas públicas. Saberes campesinos. Agroecología. Periferia urbana.



Peasant knowledge: The milpa in the crater of Xico, Mexico

JULIETA MARTÍNEZ CUERO

Professora-Investigadora na Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Doutora Mestre em Estudos Sociais pela UAM. Estágios pós-doutorais na Universidad Autónoma de Barcelona, no Instituto de Investigaciones Económicas da UNAM, na Universidad Autónoma de Chiapas. Integrante do SNI/CONACYT, México. E-mail: j.martinezc@correo.ler.uam.mx

SILVIA IVETH MORENO GAYTÁN

Professora na UAM. Doutora e Mestre em Estudos del Desarrollo Rural pela COLPOS-Montecillo. Estágios pós-doutorais no CRIM-UNAM e de pesquisa na Carleton University, Canadá. Integrante del SIN/CONACYT, México. E-mail: ivethmoreno@izt.uam.mx

ABSTRACT: The article analyzes the relevance of the traditional knowledge of small peasant producers in the face of the crisis in the Mexican countryside and food insecurity. Based on the case of the Xico crater, in the Valle de Chalco, it highlights the impact of public policies and peasant resistance on the production of native maize through agroecological practices that link traditional knowledge and new strategies in peri-urban territories of the Valley of Mexico.

KEYWORDS: Public policies. Peasant knowledge. Agroecology. Urban periphery.

RECEBIDO: 05/11/2025

APROVADO: 11/12/2025

1 introducción

La crisis por la que atraviesa el campo mexicano puede analizarse a diversas escalas. Por ejemplo, a nivel macroeconómico se observa que la aportación del sector primario al Producto Interno Bruto (PIB) es mínima, de apenas 3%; que el saldo en la balanza comercial es deficitario debido a los altos niveles de importaciones de alimentos y, sobre todo, de granos básicos; y que los niveles de empleos y de salarios en el sector dejan mucho que desear en comparación a otras actividades económicas del país. Sin embargo, lo que es importante señalar es que se trata de una problemática estructural con causas históricas (Bravo Benítez, 2011, Martínez, 2021) que no han sido atendidas de manera fehaciente por las acciones emprendidas por parte del Estado. Por ejemplo, no se han resuelto los conflictos causados por una fallida e inconclusa reforma agraria, el despojo de tierras fértiles, la falta de acceso a tecnología y créditos productivos, y el desmantelamiento del campo mexicano a partir de la abrupta apertura comercial, iniciada en la década de los ochenta e intensificada con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).¹

Esta crisis se ha expresado a través de las transformaciones en los territorios rurales considerando que las actividades agropecuarias tradicionales han dejado de ser el eje de la sobrevivencia de los hogares campesinos, que los flujos migratorios de jóvenes se han incrementado y que los niveles de pobreza y marginación son cada vez mayores. Además de los graves problemas que enfrentan las y los pobladores rurales a causa de la creciente violencia en el país. Ante estas manifestaciones a lo largo de la historia de México se han diseñado e implementado diversas políticas públicas con el objetivo de atender las problemáticas a las que se enfrentan los pobladores del campo mexicano, colocando en el centro al incremento de la productividad como elemento clave del desarrollo y bienestar (Martínez, 2025). Sin embargo, la historia ha

1 El TLCAN modificó de manera profunda la legislación agraria en México al liberalizar el comercio agrícola y agroalimentario, suprimiendo aranceles y enfrentando a los pequeños productores a una competencia desleal frente a grandes productores de Estados Unidos y Canadá. En el acuerdo se encuentran las bases legales que permiten que empresas transnacionales controlen el mercado de granos básicos.

demostrado que las soluciones propuestas han ignorado los saberes tradicionales de los campesinos, favoreciendo a un grupo de empresarios y con ello alentando la proliferación del agronegocio, la polarización entre los pobladores del campo y la competencia desleal. El empobrecimiento de los campesinos, las grandes afectaciones a los ecosistemas y la creciente inseguridad alimentaria también han sido resultado de acciones inducidas desde el Estado.

Las políticas de desarrollo rural en México han tenido distintas etapas, en las que se han diseñado distintos programas definiendo a la población objetivo en función de la coyuntura política y económica del país y del entorno internacional, lo que ha afectado de manera drástica a los pequeños productores y a sus territorios. Por ejemplo, en el marco de la puesta en marcha del TLCAN se dismantelaron instituciones que protegían la producción de alimentos regulando la competencia internacional (De Ita, 2025). Desde entonces los pequeños productores de maíz han tenido que competir con empresarios agrarios estadounidenses. En este sentido, la hipótesis central de este trabajo es que centrarse en el incremento de la productividad no es la solución. Más bien es imperante reconocer los saberes tradicionales de los campesinos e incorporarlos a procesos participativos orientados al acopio, transformación y distribución de sus cultivos para responder a la reestructuración espacial de la producción de alimentos en las relaciones campo-ciudad y a los factores macroestructurales político-económicos del sistema alimentario.

En este contexto, el objetivo de este artículo es reconocer y valorar los saberes tradicionales de las y de los pequeños productores campesinos ante la crisis estructural que enfrenta el campo mexicano y los embates de la globalización. Mediante el caso del campesino Onésimo Ventura Martínez se reflexiona, además, sobre quiénes integran hoy al campesinado, las circunstancias en que ponen en práctica sus saberes; la preservación del sistema milpa teniendo como eje articulador a los maíces nativos; la articulación de redes y experiencias agroecológicas en espacios periurbanos. Con ello, se busca que se reconozcan las particularidades y capacidades de los territorios más allá de los aspectos físicos, valorando saberes locales y alentando al fortalecimiento del tejido social.

El trabajo se presenta en cinco apartados. En el primero se describen las políticas que se han implementado en el campo mexicano, posteriormente se hace una breve revisión de la literatura acerca del campesinado, sus prácticas, identidad y resiliencia ante la crisis estructural del sector. En el tercero se presenta una breve nota metodológica, todo ello para que en el cuarto apartado se visibilice la respuesta que desde los pueblos se han abordado el caso del campesino Onésimo Ventura Martínez y el Cráter de Xico. Finalmente, se presentan las reflexiones finales como apuntes de muchos pendientes para las políticas públicas orientadas al campo mexicano.

2 Las políticas públicas ante la crisis estructural del campo mexicano

Las políticas públicas dirigidas a resolver las problemáticas del campo mexicano han perseguido distintos objetivos, determinados por las coyunturas políticas y económicas, tanto nacionales como internacionales. A lo largo del último medio siglo, el Estado ha implementado diversos programas sociales mediante los cuales ha definido los problemas del sector, sus causas y las posibles soluciones, conforme a un conjunto de ideas, sentimientos y acciones que reflejan la particular concepción del mundo de quienes, en cada momento histórico, han estado al frente del gobierno.

Este aspecto resulta relevante porque la manera en cómo se identifican las problemáticas y se define a la población objetivo, ya sea como campesinos, agricultores, productores o población en situación de pobreza, constituye el fundamento en el que se legitiman las acciones de intervención pública. Dichas acciones pueden tanto incentivar la producción como limitarse a administrar la pobreza, considerando o no la agencia de los posibles beneficiarios. Visto en retrospectiva, la idea de subordinar y, al mismo tiempo modernizar el campo mexicano a través de políticas agropecuarias orientadas a incrementar la productividad ha sido una constante en la historia del país, con impactos significativos en las actividades económicas del sector rural, en los mercados de trabajo, en la organización campesina y en los movimientos sociales.

Por ejemplo, al inicio de la fase de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI, 1940-1970), la política se basaba

en la expansión de la agricultura y en la promoción industrial. Durante esos años se impulsó la producción agropecuaria y el desarrollo de las áreas rurales mediante programas de subsidios y compras inducidas por parte del Estado, con el fin de fortalecer el mercado interno y crear una base económica sólida para la industrialización. La idea de modernizar al país industrializándolo mediante la captación de divisas provenientes de exportaciones agropecuarias provocó que los recursos públicos se canalizaran principalmente hacia los grandes productores agrícolas, excluyendo a quienes tenían producciones de subsistencia. Como menciona Vargas-Hernández (2005), durante esa época se favoreció más al sector manufacturero y a los habitantes urbanos, descuidando a los pobladores de los territorios rurales más vulnerables. No obstante, es importante señalar que, en la década de 1960, la producción de granos básicos alcanzó la autosuficiencia en entidades como Chiapas, que actualmente concentran altos niveles de pobreza y marginación.

Con el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), el crecimiento del sector agrícola se desaceleró y las políticas públicas comenzaron a favorecer la agricultura comercial de riego, en detrimento de los pequeños productores. Esta situación desembocó en un éxodo masivo de la población rural hacia las ciudades, donde las oportunidades laborales resultaron insuficientes para absorber el excedente de mano de obra. Al mismo tiempo, la desigualdad económica se profundizó, ampliando la brecha entre los campesinos y los grandes empresarios agrícolas. En consecuencia, las condiciones de vida en los territorios rurales se deterioraron gravemente, reflejando, como señala Barkin (2001), el fracaso del modelo de desarrollo de la ISI para resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión rural.

Frente a los impactos de la crisis, entre 1970 y 1982 se implementaron programas orientados a mantener principalmente el consumo con el propósito de preservar el control político sobre la población y garantizar la estabilidad social del país (Moreno; Martínez, 2025). En estos años se destinó gran cantidad de recursos al campo y a los sectores de mayor vulnerabilidad, pero sin una estrategia

para fortalecer la producción. Por un lado, a través del Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (Pider) y del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) se canalizaban ayudas a los más desfavorecidos. Y al mismo tiempo, los inversionistas privados se beneficiaron de la inversión pública materializada en infraestructura agrícola, canales de riego y caminos.

A partir de la crisis económica de 1982, se inició una fase de estabilización económica y ajuste estructural, basada en una abrupta apertura comercial, desregulación financiera e iniciativas de reformas al artículo 27 constitucional relacionadas con la privatización de las tierras ejidales.² Durante esta etapa el Estado reestructuró la instrumentación de la política agropecuaria, reorganizando las principales instituciones encargadas de implementarla con el propósito de iniciar una nueva etapa de modernización agrícola, en la que los pequeños productores eran considerados en el universo de la población que vivía en condiciones de pobreza. Tetreault (2012) señala a esta etapa como un periodo de reorientación de la política social mexicana, en la que el mercado paso a ser visto como el único mecanismo capaz de generar crecimiento económico y desarrollo.

El sexenio 1988-1994 consolidó las transformaciones iniciadas en el periodo anterior. La política social se alineó con la "racionalidad de los recursos públicos" promovida por organismos internacionales, bajo criterios de disciplina fiscal. De esta manera, las políticas sociales, incluyendo aquellas orientadas al empleo, quedaron subordinadas al ajuste estructural y a la estabilización económica del país (Ceja, 2004). La pobreza se entendió principalmente como un problema rural, reflejado en desnutrición, condiciones insalubres, alta mortalidad infantil, analfabetismo y desempleo. Durante este periodo se implementó el Plan Nacional de Desarrollo y el Estado dejó de desempeñar un papel directo en el campo mexicano.

2 Si bien hubo debates e iniciativas en la Cámara de Diputados sobre la propiedad rural y la pequeña propiedad, ninguna derivó en una reforma constitucional sustantiva en ese momento. La modificación al artículo 27 de 1992, en cambio, marcó un punto de inflexión al poner fin a la reforma agraria y permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales.

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) centró sus acciones en zonas de alta marginación, dirigidas especialmente a comunidades indígenas y a ciertos grupos urbanos excluidos de otros programas. La forma de atender a la población objetivo cambió de manera significativa. A pesar de reconocer los problemas de la pobreza rural, se abandonaron las políticas orientadas a la generación de empleo en el campo, se eliminaron los precios de garantía para los granos básicos, se suprimieron los programas de compras gubernamentales y se redujeron los créditos destinados a la producción y comercialización (Calva, 1998). Estas medidas provocaron una profunda crisis agrícola y una marcada disminución de los salarios reales en el medio rural mexicano.

El periodo que comenzó en 1995 no representó un cambio sustancial respecto al ciclo previo. La política agraria continuó supeditada a las directrices de los ajustes macroeconómicos nacionales definidos por las condiciones del entorno internacional. Persistió la noción de que la pobreza podía resolverse mediante la eficiencia del mercado y el aumento de la inversión privada como motor del bienestar social (Levy, 1991). Las transformaciones más relevantes se observaron en la gestión administrativa y en los mecanismos de distribución de los recursos públicos orientados a la reducción de la pobreza (Martínez y Peláez, 2014). En esta etapa, programas como Solidaridad, la Alianza Nacional para el Bienestar, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) y el Programa para Superar la Pobreza adquirieron protagonismo, en un contexto donde los índices de pobreza superaron los reportados durante la crisis de 1995 (Acosta, 2010, p. 241) y donde también se agudizaron las prácticas de corrupción y clientelismo entre los operadores y funcionarios responsables de los recursos públicos.

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se consolidó una visión empresarial de la producción agropecuaria y se redujo aún más el papel del Estado como garante de la seguridad alimentaria. Bajo la lógica de apertura comercial y competitividad, se fortalecieron los apoyos a grandes productores y se priorizaron los cultivos de exportación, mientras que los pequeños campesinos quedaron marginados de los beneficios de los programas gubernamentales.

Esta tendencia acentuó la desigualdad territorial, el abandono de las unidades de producción familiar y la dependencia alimentaria del país.

De acuerdo con Ordóñez (2002) la política social en ninguno de los gobiernos panistas propuso cambios esenciales en tanto al diseño y aplicación. Con Calderón, se insistió en atender las mismas variables de educación, salud, vivienda y alimentación mediante el programa Vivir Mejor. En el terreno de la producción y ante una situación de escasez e incremento de los precios internacionales de los granos básicos se puso en marcha el Programa de Acciones de Apoyo a la economía Familiar que en la práctica y en los resultados no alcanzó a impulsar la productividad en el campo mexicano. La política de Calderón terminó por dismantelar al campo mexicano agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos. Finalmente, cabe señalar que ante un escenario de crisis política y de inseguridad la política calderonista se enfocó a temas de seguridad.

Finalmente, en los últimos dos períodos de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, desde 2018 hasta el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso oficial ha sostenido que los programas estratégicos para el campo buscan alcanzar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria, estableciendo una relación causal entre productividad y bienestar. Esto a pesar de que la historia ha demostrado que mejorar los ingresos de los campesinos con el propósito de incentivarlos a producir, cuando esto llega a ocurrir, no constituye una solución suficiente para mejorar las condiciones de vida en el campo.

3 campesinos: practicas, identidad y resistencia

Ser campesino no se reduce a producir alimentos o gestionar recursos públicos para incrementar la rentabilidad de sus cultivos; implica una forma de vida, tradiciones, prácticas cotidianas y estrategias de resistencia frente a transformaciones sociales y económicas. El debate sobre campesinado y economía campesina evidencia cómo las distintas maneras de definir a estas poblaciones han condicionado las políticas públicas y la comprensión de su

realidad. Adoptar una mirada integral permite reconocer no solo su papel económico, sino también su identidad, sus saberes y las formas en que sostienen y transforman los territorios que habitan.

Dicho lo anterior es importante mencionar que los estudios del campesinado se han generado principalmente en el terreno de la sociología, la antropología, geografía y la economía, con distintos enfoques y efectos en el diseño de políticas públicas. Desde la economía se ha analizado al campo y a sus actores como una empresa privada; determinando costos de producción, niveles de inversión y tasas de ganancia. De acuerdo con Stavenhagen (1976) la mayoría de los economistas agrícolas no centran su atención en la comunidad rural y estudian a las unidades campesinas como empresas privadas obteniendo funciones de producción y calculando costos de producción. Lo que resulta en graves supuestos de racionalidad económica y optimización de los mercados. Asimismo, señala que aquellos que sí consideran a las zonas rurales, incluyendo a las economías indígenas, parten de tres premisas erróneas: 1) considerarlas sistemas cerrados en equilibrio, 2) pensarlas como unidades de autoconsumo, y 3) suponer al consumo capitalista como la única vía de desarrollo para estas economías. Por su parte la geografía y en particular la geografía humana abandonó lo rural y regional; la geografía urbana se centró en la planeación territorial y la expansión de la ciudad neoliberal, agudizando las dicotomías para definir y distinguir lo urbano de lo rural, generando una aparente ruptura territorial, donde pareciera que el campo y la vida rural no se relacionan con los *habitus* urbanos.

Por otro lado, el uso indistinto de las nociones de campesinado y economía campesina en el diseño de políticas y programas orientados a solucionar las problemáticas en el campo ha tenido implicaciones importantes en la población beneficiaria. Por ejemplo, el presuponer ciertas condiciones materiales, como la disposición de tierras o el acceso a herramientas o maquinaria, ha conducido a proponer soluciones que algunas veces están alejadas de la realidad. Como advierte Domínguez (1993), el principal desafío consiste en alcanzar un equilibrio entre lo general, de orden teórico y las condiciones históricas concretas del campesinado.

En este sentido, el debate académico ha delineado al menos tres formas de concebirlo: una primera centrada en la propiedad y el control de los medios de producción, que cuestiona si quienes no poseen tierra y recurren al arrendamiento pueden ser considerados campesinos; una segunda que analiza los efectos de la inserción del campesinado en el mercado capitalista, interrogándose sobre la pérdida o redefinición de su condición cuando vende parcialmente su fuerza de trabajo o combina actividades agrícolas y no agrícolas, así como cuando orienta parte de su producción al mercado; y una tercera vertiente que problematiza la existencia de diferenciaciones y clases sociales al interior de las comunidades campesinas. En conjunto, estas perspectivas muestran que una definición simplificada del campesinado tiende a traducirse en políticas desarticuladas de las condiciones reales del campo.

Otra noción presente en el debate académico y que ha sido incorporada, de manera acrítica, en el diseño de las intervenciones estatales es la de sociedad campesina. Su uso ha sido cuestionado debido a las confusiones analíticas que genera, ya que remite a una supuesta unidad social homogénea y tiende a invisibilizar la coexistencia de distintos modos de producción dentro de una misma formación social. Si bien autores como Wolf (1978), Redfield (1986), Foster (1964) y Warman (1974) recurrieron a este concepto para referirse a determinados segmentos sociales, Calva (1988) señala las inconsistencias derivadas del empleo indiscriminado de los términos campesino y sociedad campesina, en la medida en que ambos conducen a una representación uniformadora de realidades profundamente heterogéneas. Una lógica similar se reproduce con la noción de cultura campesina, entendida como un conjunto homogéneo de valores, prácticas y formas de pensamiento compartidas por todos los campesinos. Para Calva (1988), la categoría de cultura campesina carece de validez analítica cuando se utiliza como un principio totalizante que ordena a la humanidad a partir de supuestas semejanzas universales, reforzando así visiones simplificadoras que, trasladadas al ámbito de las políticas públicas, dificultan el diseño de acciones acordes con la diversidad social del campo.

El campesinado no puede definirse de manera homogénea ni únicamente a partir de la propiedad de la tierra, sino como un conjunto de sujetos sociales diversos, históricamente situados, cuya existencia está estrechamente vinculada con la reproducción de la vida, el territorio y las estrategias de resistencia frente al modelo agroindustrial y capitalista dominante. Si bien los campesinos no son necesariamente indígenas, la gran mayoría de la población indígena mantiene una relación directa con la tierra; no obstante, una parte de ella se dedica a otras actividades productivas o transita entre distintas ocupaciones. Esta movilidad responde a problemáticas concretas, como el despojo de tierras fértiles, la implementación de programas que, lejos de mejorar los niveles de productividad, han contribuido al desgaste de los suelos, así como, de manera central, a la competencia desleal frente a empresas transnacionales (García y Giraldo, 2021).

Además, ser campesino e indígena implica una carga social, económica y política que ha configurado históricamente la vida rural del país. Como señala Arizpe (1976), indígenas y mestizos no constituyen universos culturales aislados, sino que participan en un sistema complejo de dominación económica y sometimiento político. A lo largo de la historia, se han desarrollado prácticas ideológicas que han legitimado la subordinación de los campesinos indígenas, repercutiendo en el acceso a recursos y oportunidades económicas, así como en procesos sistemáticos de despojo y fragmentación de sus tierras, que han debilitado sus formas de reproducción social y productiva.

Durante la colonización y la estratificación étnica, las comunidades indígenas fueron aisladas del plan de desarrollo económico, generando relaciones de subordinación tanto hacia otros campesinos como hacia empresas agrícolas (Stevenhagen, 1976). La expansión de la economía capitalista, a finales del siglo XIX, incorporó a estas comunidades al mercado monetario mediante el trabajo asalariado y el control de sus tierras, trastocando su organización interna y profundizando los mecanismos de subordinación. En la etapa de industrialización, se intensificaron las tendencias monopólicas en la producción agrícola, y muchos indígenas se convirtieron en campesinos dependientes o proletarios rurales.

La relación entre sectores indígenas y mestizos se ha caracterizado por vínculos de dominación simbiótica, en los que los mestizos ejercen poder económico y social sobre los indígenas, legitimado por la percepción de superioridad del ladino (Aguirre-Beltrán, 1967). Esta subordinación histórica explica, en gran medida, los movimientos campesinos indígenas, cuya principal demanda ha sido el acceso a la tierra y la defensa de sus territorios (Bartra; Otero, 2008). La persistencia de modos de producción no capitalistas dentro de un sistema dominado por el capitalismo refuerza esta tensión entre integración económica y marginalización (Palerm, 1978).

El desarrollo del capitalismo en el campo mexicano ha tenido efectos contradictorios sobre la economía indígena campesina. Según Díaz-Polanco (2010), por un lado, ha contribuido a la desintegración de los modos tradicionales de producción, y por otro ha incorporado la producción campesina al proceso de acumulación de capital. González-Casanova (1984) destaca que, en este contexto, la autoridad reside en el ladino mientras el indígena permanece subordinado, reflejando las características de una sociedad colonizada. La penetración del capitalismo moderno ha transformado la economía campesina indígena, eliminando ocupaciones tradicionales y estableciendo nuevas actividades productivas que afectan la dinámica comunitaria, mientras la expansión del neoliberalismo y el aumento de la población rural intensifican la fragmentación de la tierra y reducen los niveles de productividad (Arizpe, 1976).

En este sentido, es importante señalar que, en muchas ocasiones, las políticas públicas incorporan la idea de que el atraso económico de los territorios indígenas se debe a supuestas características culturales, como la flojedad o la incapacidad, lo que refuerza estereotipos que limitan el acceso a créditos productivos y a programas orientados a incentivar la producción agrícola respetando los saberes tradicionales de los campesinos. En consecuencia, la participación de estas poblaciones en el mercado capitalista se da en condiciones desventajosas, profundizando la pérdida de recursos y reproduciendo un proceso histórico de estigmatización étnica que se remonta a la época colonial. Estas representaciones no solo operan a nivel discursivo, sino que también tienen efectos

materiales concretos en la organización del trabajo rural, como lo evidencian los datos recientes sobre la estructura de la fuerza laboral agropecuaria.

En la actualidad, el campesinado presenta una composición heterogénea y profundamente marcada por la precarización laboral. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, la fuerza de trabajo en actividades agropecuarias ascendió a 26 984 247 personas, de las cuales 42 % corresponde a mano de obra permanente. De las 11 120 516 personas que trabajan de manera constante en el sector, 30 % lo hace directamente en su propia unidad de producción, mientras que 53,8 % corresponde a familiares que no reciben sueldo ni salario. Asimismo, 4,1 % son familiares remunerados, 4,4 % trabajadores contratados por seis meses o más y 8 % trabajadores permanentes con contratos menores a seis meses. La magnitud de la mano de obra eventual, que alcanzó 15 863 731 puestos de trabajo, evidencia la alta dependencia del sector de empleos temporales y precarios. Cabe destacar que 46 % de esta población pertenece a algún grupo indígena (INEGI, 2023), lo que muestra cómo la estigmatización histórica se traduce en formas específicas de precarización laboral en el campo mexicano.

Respecto a la edad de las personas que dedican su vida a labores del campo, la mayoría es relativamente adulta, ya que 72,8 % tiene más de 45 años y 26,8 % supera los 65 años. Estos datos sugieren una escasa incorporación de jóvenes al sector, lo que podría comprometer la sostenibilidad de la producción agrícola y refleja, además, posibles procesos de migración juvenil hacia áreas urbanas en busca de mejores oportunidades. En cuanto a los niveles educativos han mejorado respecto a lo reportado en 2007: aunque la educación primaria sigue siendo predominante, su proporción disminuyó de 54,9 % a 50,4 %, mientras que los niveles de secundaria, preparatoria o bachillerato, así como licenciatura, ingeniería y posgrado, registraron incrementos significativos en quince años (INEGI, 2023). Por otro lado, es importante mencionar que según datos de Coneval (2023), 50.7% de los mexicanos que vive en localidades rurales se encuentran en condiciones de pobreza con importantes rezagos en cuanto a carencias sociales, destacando que la principal afectación es la falta de seguridad social, 77%, y las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda (25.8%).

En este contexto, resulta fundamental dar visibilidad a los conocimientos tradicionales y a las propuestas que los propios campesinos han desarrollado en zonas periurbanas, en las que las definiciones clásicas del campesinado quedan superadas, así como los límites entre lo rural y lo urbano. A partir de esto, se busca reflexionar acerca de cómo estas iniciativas constituyen alternativas frente al modelo agrícola dominante, integrando propuestas de los pueblos y comunidades para construir una agricultura más sostenible y resiliente. Asimismo, se evidencia la verticalidad con que las políticas públicas han intervenido en el desarrollo rural, especialmente en la producción de granos básicos, reproduciendo una lógica estructural de desmantelamiento del campo mexicano que ha desplazado la producción de alimentos hacia las dinámicas del mercado y marginado los modos de vida campesinos y de los pueblos rurales. Ante las grandes desigualdades socioeconómicas y territoriales de la principal urbe del país, la Ciudad de México destaca la firmeza de los pueblos para readaptar su ser campesino, generar redes entre la agricultura tradicional con la agroecología y mantener los territorios agrícolas para la producción de alimentos básicos de la cultura alimentaria mexicana.

4 Nota metodológica

El trabajo de campo en la zona de estudio inició desde 2013, derivado del primer acercamiento de investigación que se tuvo con el campesino Onésimo Ventura Martínez para explorar los huertos comunitarios en San Miguel Xico, localidad del municipio 122 Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México. En octubre de 2025 se centró el trabajo en entrevista directa con Onésimo, quien es un personaje central dentro de la historia oral de su pueblo y municipio, además de ser un experto en la preservación de maíces nativos y vinculación territorial para los maíces de la Región de Los Volcanes. El campesino autorizó colocar su nombre completo en la entrevista y redes sociales para difundir la historia oral de lo que él sigue llamando su pueblo: Xico.

La fotografía con drones que se comparte del cráter de Xico fue tomada por el estadounidense George Steinmetz en septiembre

de 2021, justo porque Onésimo fue el guía para esa expedición. La cartografía se hizo con base en el Sistema de Información sobre biodiversidad portal de geoinformación (SNIB), información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y del Environmental Systems Research Institute (ESRI, 2019), utilizando ArcGIS Desktop: Release 10.8, Redlands, CA.

5 La propuesta desde los pueblos: caso de estudio en el cráter de Xico

El efecto de las políticas agrícolas en la población se resume en la pregunta: ¿Qué vamos a comer hoy?, cuestionamiento cotidiano en los hogares de sectores populares en las ciudades y en las zonas periurbanas de México. Es una pregunta de relevancia, en tanto que es uno de los principales medios para mantenernos con vida y es, frecuentemente, el único momento de interacción familiar y social, así como de descanso. No obstante, que es un acto cotidiano y básico, lograr la alimentación cada día implica numerosos esfuerzos individuales, familiares y sociales, así como prácticas de cuidado de la vida para lograrlo. Aunque en los dos últimos años disminuyó la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad en México, los datos del 2022 muestran que 18.2% de la población, es decir, 23.4 millones de personas, carecen de alimentos saludables (Coneval, 2023). No solo eso, los datos de la Secretaría del Bienestar (2024) para algunas ciudades mexicanas muestran a una población en situación de pobreza (33.87% \pm 12.72), en carencia por acceso a servicios de salud (30.15% \pm 12.22%) y en carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (16.86% \pm 5.75). Todas estas situaciones reflejan los grandes desafíos que presentan las políticas públicas y al mismo tiempo las fallas de un sistema económico que ha dejado en el olvido a los actores centrales del campo, los pequeños productores. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 sorprendió a México con 75.2% de los adultos de 20 años en adelante, con sobrepeso u obesidad y con una prevalencia general de enfermedades coronarias y diabetes (INEGI, ENSANUT; 2018) y con un 18.4% de la población con hipertensión (INSP, 2019).

Ante este escenario, la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las causas que nos llevan a estos preocupantes, dolorosos y vergonzosos números en relación con el campo, la pobreza, la alimentación y la salud en nuestras ciudades? La dinámica de las ciudades que prevalecen en México promueve dicotomías como la división imaginaria y artificial entre naturaleza y cultura, genera desarticulación entre las personas, los colectivos y los procesos alimentarios que permiten la vida. Así, los habitantes urbanos y periurbanos en general desconocemos cómo nos alimentamos, de qué manera se producen esos alimentos, qué relaciones favorecemos con nuestras decisiones y quiénes son los ambientes, colectivos y personas relacionadas con esto, cuáles son las implicaciones de nuestras relaciones alimentarias, es decir, cómo podemos acceder a nuestra soberanía alimentaria y de salud; ¿cómo favorecemos la construcción de territorios sustentables desde las zonas periurbanas?

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México inició su expansión hacia el oriente en la década de 1970 con el surgimiento de Ciudad Nezahualcóyotl, extendiéndose posteriormente hacia Chimalhuacán y, hacia 1990, sobre los municipios de Chalco, Los Reyes, Ixtapaluca, Chicoloapan, Valle de Chalco y Texcoco. Este proceso de expansión urbana fue resultado de los flujos migratorios del campo a la ciudad, producto de la crisis agraria, la disminución de oportunidades en el medio rural y las políticas públicas que debilitaron la producción campesina. También, la misma Ciudad de México creció sobre las Alcaldías que se consideraban rurales y pulmones de la ciudad, llevando casi a la extinción de la chinampa y las reservas de lagos y lagunas del sureste de la capital, así como de la agricultura dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, la falta de articulación entre políticas públicas en por lo menos dos de las entidades federativas que integran la Megalópolis como Estado de México y Ciudad de México demuestra la falta de planificación territorial, pero, sobre todo, evidencia la acción de la población por preservar sus territorios e identidad colectiva a través de articular territorio, cultura y alimentación.

La falta de planificación territorial en la expansión de la megalópolis ha provocado que las ciudades sean destructivas con el

medio ambiente, el campo y con la diversidad en la alimentación. La población humana en las ciudades medias y pequeñas de Latinoamérica, y especialmente en México, ha aumentado y esta tendencia continuará en las próximas décadas. Las pequeñas ciudades y ciudades medias están creciendo sobre superficies que recientemente tenían un uso agrícola y que, debido a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad sobre los modos de vida de los pequeños productores y campesinos, las tierras de cultivo se fueron abandonando y convirtiéndose en lotes para la construcción de viviendas de autoconstrucción o de inmobiliarias. También, el crecimiento de las zonas urbanas es a costa de los bosques en detrimento del medio ambiente y de los recursos naturales fundamentales para los ecosistemas y la vida de las poblaciones humanas. Esta expansión de lo urbano incrementa los retos alimentarios, hídricos y ambientales. No obstante, a estos fenómenos de estas urbes se presenta la resistencia y potencia biocultural y agroecológica de las personas, comunidades y colectivos que estaban presentes o que han llegado con la ciudad y que suelen ser comunidades de campesinas, pueblos originarios, movimientos ambientales y sociales, profesionistas y estudiosas de la salud, de la agricultura o silvicultura y de personas de las grandes ciudades.

La expansión de la ciudad es a expensas de sacrificar la vida campesina, los ecosistemas naturales y las interrelaciones sociales que entre naturaleza y seres humanos tendría que mantenerse. Este sacrificio que al mismo tiempo es una reproducción del modelo capitalista para marcar la diferenciación social entre clases, no tiene un crecimiento lineal y aceptado en absoluto. En oposición al modelo de expansión de la ciudad como fase de reproducción del capitalismo neoliberal, los campesinos y grupos sociales generan resistencias para mantener milpas, sistemas forestales, agricultura tradicional y potenciar alianzas campo-ciudad y colectivos que impulsan la agroecología en los pueblos denominados originarios y con sectores de la población que tampoco están de acuerdo con los actuales modelos de urbanismo y edificación de la ciudad. Las ciudades inteligentes que hoy se plantean como modelos de edificación de la ciudad, no sólo tienen que basarse en la tecnología, que es dependiente de la electricidad y energías fósiles, se tiene que

plantear restaurar la ciudad como ecosistemas para abordar críticamente los modelos centrados en personas que viven en sociedad donde hay una intrínseca relación económica y ambiental. Justamente, las respuestas a las preguntas e hipótesis planteadas en este artículo están en la conexión entre pequeños productores campesinos con los procesos ideológicos – participativos que se mantienen entre la agricultura tradicional del sistema milpa mexicano y la agroecología para la reestructuración espacial. En este mismo sentido, Haesbaert (2013) propone la articulación de pequeños territorios o la suma de localidades en territorios-red o redes que reúnan múltiples territorios, creando así la multiterritorialidad. El autor señala que el territorio también sirve de contención, siempre vinculado con el poder y los procesos sociales mediante el control del espacio. Anota, además, que éste no siempre tiene una acepción negativa, sino que el “control del espacio” abre la reconstrucción territorial positivamente para que las comunidades ejerzan poder local, se sumen localidades, enlace comunidades y genere redes más amplias que tienen efecto a nivel global.

Esta suma de localidades en territorios-red tienen que partir desde una primera aproximación al “lugar”, es decir, como ese espacio singular donde los pueblos privilegian sus derechos socioculturales, políticos, económicos y ambientales (Escobar, 2000). Una segunda, se refiere a un acercamiento como construcción sociocultural (Giménez, 1999), sujeto a regulaciones, instituciones y al ejercicio del poder sobre una población (Foucault, 2006). Una tercera, parte de ubicar al territorio como un sistema complejo en el que la naturaleza, la organización sociopolítica y la cultura interactúan para construir una imagen, un símbolo y una identidad nutrida por los recursos tangibles e intangibles, sujeto al intercambio y al flujo de información con otros territorios (Boisier, 2010).

Sin duda, un eje que articula territorios-red en México es el sistema milpa con maíces nativos, dentro de un sistema de relaciones desiguales de poder en un proceso local-global por defender las condiciones medioambientales (agua, suelo, recursos, entre otros) y a las implicaciones de la reconstrucción de la territorialidad o considerando, en términos de Jean Gottman, el territorio como recurso natural (1973). Desde lo local, las comunidades con

sus consignas ideológicas y causas sociales logran que en las lógicas verticales se discutan conceptos no previstos, como lo es la milpa y los maíces nativos.

En la vinculación alimento-territorio intervienen varios productos o recursos territoriales que construyen Soberanía Alimentaria de comunidades y regiones, hasta alcanzar una esfera nacional y global. Una de las figuras icónicas en México a nivel internacional es la estrecha relación entre el maíz y la identidad. La siembra se hace por una preservación del grano adaptado a las condiciones climáticas y del relieve, así como a las necesidades alimenticias del núcleo doméstico, básicamente por la importancia que estas acciones tienen en el bienestar y en la calidad de vida. La defensa y preservación del maíz nativo impulsa resistencias locales no sólo desde las comunidades indígenas, sino que también ocurre desde la población rural-mestiza, urbana, campesina e indígena.

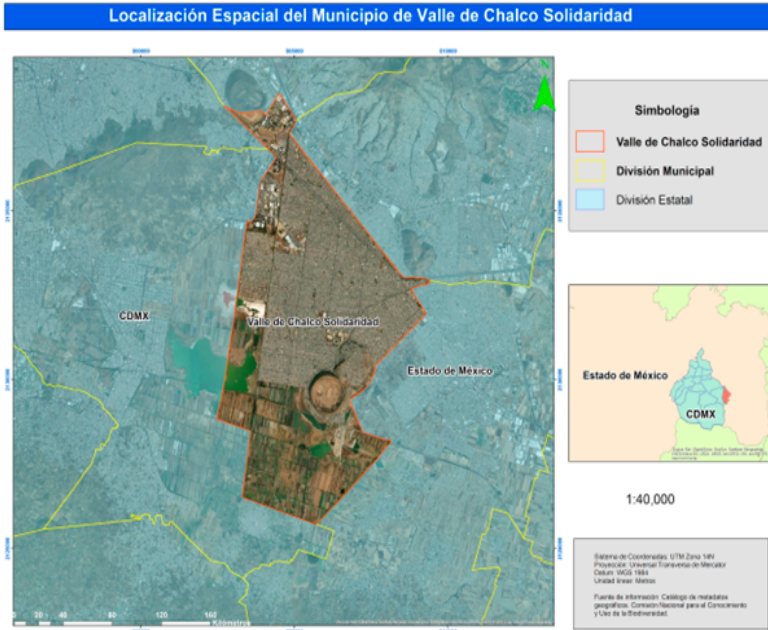
5.1 La milpa en el cráter de Xico

En el municipio de Valle de Chalco Solidaridad (creado en 1994) se encuentra el cráter de Xico, el cual pasa desapercibido en el paisaje gris de la mancha urbana que caracteriza a la Zona Oriente del Estado de México y Ciudad de México. Justamente, el cráter de Xico se encuentra muy cercano entre la intersección de los límites jurisdiccionales de la Alcaldía de Tláhuac (Ciudad de México), el municipio de Chalco y Valle de Chalco (Estado de México) (Mapa 1). Toda esta área pertenece a la Zona Metropolitana de Ciudad de México, la cual creció sobre ejidos y zonas chinamperas,³ sucesos que pudieron consolidarse a consecuencia de la reforma al artículo 27° constitucional en el año 1992, que representó un cambio al régimen de propiedad agraria, marcando fin al reparto agrario y apertura del sector social de la tierra con el mercado, puso fin a la política derivada de la revolución mexicana; permitió a los ejidatarios mediante decisión de asamblea el dominio pleno sobre sus parcelas individuales para convertirlas en propiedad privada; abrió la posibilidad de que la tierra ejidal pudiera ser vendida, arrendada

3 Chinampa: sistema de cultivo artificial prehispánico, construido sobre cuerpos de agua del Valle de México.

o utilizada como garantía, impulsó la mercantilización y el cambio de uso de suelo.

Mapa 1 – Localización de Valle de Chalco y Cráter de Xico en el Estado de México



Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. INEGI (2020).

No obstante, al complejo entramado de relaciones histórico-territoriales entre campo y ciudad, los campesinos al suroriente de la Ciudad de México han resistido a la expansión de la mancha urbana con milpas y cultivos con identidad territorial, tales como el amaranto y el maíz chalqueño (Imagen 1).

El municipio de Valle de Chalco empata con las políticas posteriores a las reformas del artículo 27° constitucional de 1992, a los programas para subsidiar a la población que emigró del campo a la ciudad, pobladores que adquirieron terrenos para la vivienda de autoconstrucción de lo que fue ejido. A la par, el pueblo originario de Xico permaneció con sus prácticas y nuevas formas de

ser campesinos, conviviendo con los colonos y manteniendo las milpas en las laderas del cráter y en la zona central (Imagen 1).

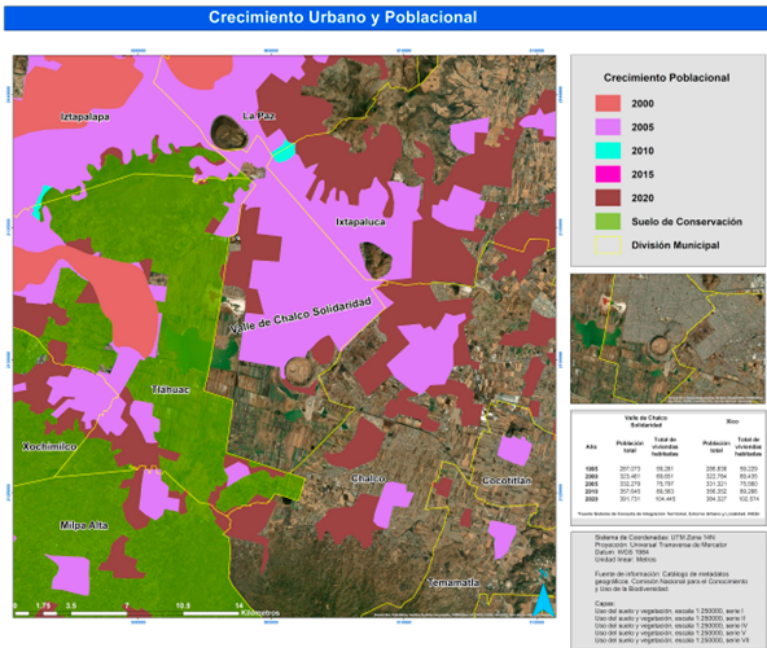
El territorio oriente de la Ciudad de México se transformó totalmente en dos décadas. El municipio de Valle de Chalco en la zona oriente del Estado de México tiene datos estadísticos a partir de su consolidación legal como municipio en el año 1994 (Tabla 1). A partir de este momento, la vida cotidiana campesina se transformó radicalmente pero no desapareció y resiste pese al desinterés por décadas del Estado mexicano sobre el campo y la soberanía alimentaria (Mapa 2).

Tabla 1 – Población en Valle de Chalco y población de Xico

Año	Valle de Chalco Solidaridad		Xico	
	Población total	Total, de viviendas habitadas	Población total	Total, de viviendas habitadas
1995	287,073	59,281	286,839	59,229
2000	323,461	69,651	322,784	69,435
2005	332,279	75,797	331,321	75,560
2010	357,645	89,563	356,352	89,266
2020	391,731	104,445	384,327	102,574

Fuente: Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. INEGI.

Mapa 2 – Crecimiento poblacional y urbano de la región oriente entre Estado de México y Ciudad de México



Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. INEGI (2020).

La dotación de tierra derivado del reparto agrario en Xico comenzó en la década de 1930. De ese primer momento, la población con título de propiedad ejidal en su mayoría murió. Hoy día, los que siembran, cultivan y se relacionan con el ecosistema que pervive en el cráter de Xico es sucesora, tal es el caso de Onésimo Ventura Martínez de 74 años, Campesino hacedor de milpa en el oasis ecosistémico que representa el cráter de Xico dentro de los municipios del oriente conurbado del Estado de México.

“En el cráter de Xico hay tres ejidos: San Martín Xico con 52 ejidatarios, Chalco con 17 ejidatarios, San Miguel Xico 37 ejidatarios, en total 106 ejidatarios. En el cráter siguen sembrando como parte de Valle de Chalco, el ejido es San Miguel Xico, anteriormente Estación Xico. El nombre de San Miguel Xico

se da aproximadamente a partir de la década de 1980, en asociación o relación con un santo. En Valle de Chalco hay 84 ejidatarios contando a los del Cerro de la Mesa, popularmente conocido como Cerro del Marqués, sin embargo, en este cerro el crecimiento de vivienda fue más acelerado a partir de 2005 y quedan algunas parcelas que no fueron vendidas al complejo inmobiliario ARA. En el Cerro de la Mesa se ha lotificado, pero quedan milpas, otros cultivos, parcelas que ya no siembran, las laderas del cerro de la Mesa. Del total de los 37 ejidatarios, sólo 25 siguen sembrando dentro del cráter de Xico; sólo dos son mujeres, pero el trabajo campesino se hace en familia, entre hombres y mujeres, trabaja toda la familia, los niños y hasta los perros.

Yo no soy el ejidatario directo, el ejidatario fue mi papá que le dotaron en el año 1933. Hasta hoy no he podido arreglar los papeles, aunque lo he intentado. A mí me enseñaron a sembrar desde pequeñito, de niño me hicieron mis herramientas a mi tamaño. Los motivos por los que sigo sembrando tienen que ver con mi identidad que me forjaron desde niño, además yo soy feliz sembrando y cosechando. Me deprimó cuando no hay cosecha, hace 2 años me quedé sin semilla, no hubo lluvia, pero gracias a los intercambios de semillas que se están impulsando en la escuela agroecológica de la que soy parte, volví a tener maíz de Xochimilco y un vecino de parcela me dio algunos maíces chalqueños que él trajo de Tlapala; y en la feria de la comunidad Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala también conseguí mis maíces con eso pude volver sembrar. Estas iniciativas de ferias del maíz son recientes, pero han servido para rescatarnos de los años de intensa sequía. Este año 2025 habrá buena cosecha y buen maíz, la lluvia fue abundante y todo el cráter pudo recuperarse.

En el cráter normalmente se siembra maíz, frijol, haba, calabaza en pequeña escala y autoconsumo. El tipo de maíz que se siembra mayoritariamente es el chalqueño. El maíz chalqueño se caracteriza porque en el centro tiene un punto y un pico que lo une al olote.

Yo no uso fertilizantes y pesticidas, aunque recientemente, de tres años para acá, me dan dos tipos de fertilizantes: urea y fosfato diamónico, yo no los he buscado, el gobierno manda a su personal. La verdad yo los regalo, a mí me gusta hacer todo de manera artesanal, y lo regalo porque no tengo necesidad económica, entre mi salario, mis animales y mi cosecha, puedo vivir. No uso nada de eso para comer más sano, más limpio, porque yo también dejo crecer los quelites y tengo muchas satisfacciones.

No todos los que seguimos sembrando lo hacen como yo, varios lo hacen medio artesanal porque ya metemos tractor, pero la siembra es manual lo que sí pasa, es que casi todos colocan los fertilizantes que da el gobierno. Yo causo admiración porque tengo casi los mismos rendimientos que ellos sin colocar los fertilizantes. También, hay un compañero al poniente que ya siembra maíces mejorados, sin embargo, no se generaliza ese tipo de maíz porque los compañeros ya se dieron cuenta que la semilla se tiene que comprar y el bulto cuesta casi \$5000 pesos, además el maíz chalqueño sabe rico, el maíz mejorado se ve bonito, crece parejito y es más grande, pero no es sabroso y debido a eso no se gana al venderlo como elote, la planta de este tipo de maíz es diferente, las hojas son más grandes, pero no sabe rico y no crecen quelites sabrosos, todo ahí está insípido, ni los chapulines se van tanto para allá.

Yo no introduzco nuevos maíces o mejorados porque no tengo certeza de nada, son daños a la salud, a la tierra y ni a mis vacas les gustó la pastura, una vez hice la prueba. Sigo sembrando maíces nativos porque me gusta compartir conocimientos en la escuelita agroecológica, además soy presuntuoso y me gusta presumir lo bueno de mi pueblo.

Yo inicié a compartir conocimientos con las escuelas a nivel secundaria de Valle de Chalco en 1998, tuvimos poco éxito, pero eso nos valió para que hoy visualicen el Cráter de Xico y ya sea área natural protegida a nivel municipal. Es importante dar a conocer el trabajo de

comunidad de la milpa. Mi trabajo campesino me ha permitido vincularme con investigadores de maíces de la región de los volcanes para proteger los maíces, para difundir y sobre todo preservar. Y debido a las fotografías con drones del fotógrafo estadounidense George Steinmetz que retrata sistemas alimentarios, me pude vincular con la escuela agroecológica que se impulsa en Xochimilco para regresar la agricultura a las chinampas. Con esta escuela yo he aprendido mucho, pero todos los estudiantes jovencitos también están aprendiendo mis técnicas tradicionales, que lo bueno de todo esto es que ambas no están peleadas, sino que los jóvenes están adaptando al área que ellos manejan y saben hacer muchos preparados que no dañan a otras especies animales y vegetales asociadas a la milpa” (Entrevista con Onésimo Ventura Martínez en 28 de octubre de 2025).

Imagen 1 – Cráter de Xico, maíz nativo chalqueño y campesino de Xico



Fuente: arriba a la izquierda, George Steinmetz, abajo a la izquierda Silvia Iveth Moreno Gaytán; a la derecha, foto de campesino por Silvia Iveth Moreno Gaytán.

Los maíces nativos en México se vinculan directamente con la soberanía alimentaria nacional, pero de manera local, el hacer milpa en un territorio donde domina la expansión de lo urbano y además popular de la Metrópolis de Ciudad de México, las áreas populares siguen carentes de servicios básicos como agua potable de calidad, pavimentación, internet 5G; y acceso a derechos esenciales tales como la educación de calidad en todos los niveles básicos hasta universitarios, salud y la alimentación de calidad, todo no desvinculado de los recursos territoriales y saberes que posee la población de los pueblos originarios pero también los que llegaron y ahora son colonos, muchos que también tienen arraigo al campo.

A partir del relato de Onésimo Ventura Martínez se puede constatar varios hechos de la historia de los campesinos y de su necesidad de proteger la soberanía alimentaria en México. También, se puede evidenciar como la reforma al artículo 27° reestructuró con alevosía al ejido, permitiendo la venta a donde llegó a vivir población popular y con una estructuración y servicios urbanos precarios que distan mucho de entrar en los esquemas y modelos de las ciudades inteligentes a los que se quiere guiar el hacer ciudad.

Los saberes y prácticas de Onésimo forman parte de la resistencia campesina en México frente a políticas públicas fallidas y a los reiterados intentos por controlar la producción y comercialización del maíz. Su conocimiento sobre el manejo de la milpa, la diversificación productiva, la selección y conservación de semillas nativas, así como el respeto a la naturaleza, constituye una alternativa al modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de agroquímicos. A través de redes campesinas, estos saberes se transmiten y se preservan, fortaleciendo la autonomía productiva y contribuyendo a la soberanía alimentaria desde el territorio. Hacer milpa en el cráter del volcán materializa la oposición de campesinos a las políticas neoliberales que han provocado la crisis por la que atraviesa el campo mexicano.

En el relato de Onésimo se da cuenta de cómo a través de saberes tradicionales se preservan los maíces nativos y se resiste a la dependencia de insumos externos, como los fertilizantes o las semillas mejoradas. Asimismo, en su caminar y en el comparar con jóvenes campesinos en la escuela agroecológica que se

impulsa en Xochimilco, se vislumbra la importancia del diálogo de saberes que se teje a partir de los conocimientos agroecológicos.

6 Reflexiones finales

A lo largo del trabajo se ha argumentado que las políticas públicas orientadas al campo mexicano han estado condicionadas por coyunturas políticas y económicas de cada periodo, definiendo problemas, causas y soluciones desde visiones estatales que, en muchos casos, han subordinado al sector rural a una lógica productivista y de modernización dependiente del mercado. Estas estrategias han buscado incrementar la productividad, limitando la participación de actores rurales y debilitando formas comunitarias de organización y producción. Frente a ello, los saberes tradicionales y las prácticas agroecológicas impulsadas por los pequeños productores y pueblos campesinos se han configurado como alternativas que revalorizan la agencia local y promueven formas sostenibles de producción. En este sentido, reconocer la capacidad de los territorios rurales y periurbanos para articular conocimiento ancestral, innovación y cooperación social resulta fundamental para reorientar las políticas públicas hacia modelos más justos, participativos y comprometidos con la soberanía alimentaria y la sustentabilidad.

Además, la insistencia de las transnacionales por probar la siembra comercial de maíces transgénicos en México intensificó la lucha de la sociedad por la defensa del sistema milpa que es un policultivo que tiene por eje central al maíz nativo de cada región y se asocia con chiles, calabazas, frijoles, habas o alguna leguminosa de cada localidad; también se aprovechan las arvenses de manera positiva dentro del agroecosistema que integra la milpa. Esta oposición de la sociedad ha consolidado la valoración y defensa de las Variedades Nativas de Maíz para la Construcción de la Soberanía Alimentaria, mismo que sirve para construir un posicionamiento de las comunidades contra la incorporación de semillas transgénicas con la finalidad de enfrentar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al actual Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Y más recientemente, consolidar la oposición al uso del glifosato.

La labor de Onésimo en el cráter de Xico, en el Valle de Chalco, evidencia cómo, frente a los efectos de las políticas públicas, las comunidades rurales han desplegado hacia las periferias de las ciudades estrategias de resistencia que articulan saberes heredados con prácticas agroecológicas contemporáneas. Estas experiencias revelan la capacidad de los territorios periurbanos para reinventar la producción de alimentos y sostener modos de vida campesinos en contextos de creciente presión urbana y económica. De este modo, se plantea la necesidad de reorientar las políticas rurales hacia enfoques más integrales y participativos, que reconozcan el papel estratégico de los saberes locales, fortalezcan la organización comunitaria y promuevan modelos agroecológicos como vía para alcanzar una agricultura más sostenible, equitativa y culturalmente arraigada.

REFERENCIAS

AGUIRRE-BELTRÁN, Gonzalo. **Regiones de refugio:** el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mesoamérica. México: Fondo de Cultura Económica, 1967.

ARIZPE, Lourdes. Migración indígena, problemas analíticos. **Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales**, v. 2, n. 5, p. 63-90, 1976.

BARTRA, Armando; OTERO, Gerardo. Rebelión contra el globalismo neoliberal y el TLCAN en el México rural. Del Estado corporativista a la formación político-cultural del campesinado. **Textual**, n. 50, p. 1-34, 2008.

BARKIN, David. La nueva ruralidad y la globalización. In: PÉREZ, Edelmira; FARAH, María Adelaida (coords.). **La nueva ruralidad en América Latina:** Maestría en Desarrollo Rural, 20 años. Tomo 2. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Desarrollo Rural, p. 21-40, 2001.

BOISIER, Sergio. Descodificando el desarrollo del siglo XXI: subjetividad, complejidad, sinapsis, sinergia, recursividad, liderazgo y anclaje territorial. **Semestre Económico**, v. 13, n. 2, 2010.

BRAVO BENÍTEZ, Ernesto. Reseña de Crisis en el campo mexicano, de Bernardo Olmedo Carranza. Problemas del Desarrollo. **Revista Latinoamericana de Economía**, v. 42, n. 165, p. 176-179, 2011.

CALVA, José Luis. **Los campesinos y su devenir en las economías de mercado.** México: Siglo XXI, 1988.

CEJA, Concepción. La política social mexicana de cara a la pobreza. **Scripta Nova:** Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, v. 8, n. 176, 2004.

CONEVAL – CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. **Medición de la pobreza multidimensional 2022**. Ciudad de México: Coneval, 2023.

DE ITA, Ana. Maíz: la no política. **La Jornada**. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), 29 jun. 2025. Disponible em: <<https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/06/29/opinion/maiz-la-no-politica>>. Acesso em: 2 feb. 2026.

DÍAZ-POLANCO, Héctor. **Ensayos sobre diversidad**: visiones desde México. Santo Domingo: Ferilibro, 2010.

DOMÍNGUEZ, Rafael. Caracterizando al campesinado y a la economía campesina: pluriactividad y dependencia del mercado como nuevos atributos de la campesinidad. **Agricultura y Sociedad**, n. 66, p. 97-136, 1993.

ESRI – ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE. **ArcGIS Desktop: Release 10.8**. Redlands, CA: ESRI, 2019.

INEG – Instituto Nacional de Estadística y Geografía; ENSANUT – Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (2018): Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: INSP/INEGI. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf> Acesso em: 2 feb. 2026.

FOSTER, George. **Las culturas tradicionales y los cambios técnicos**. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.

FOUCAULT, Michel. **Seguridad, territorio, población**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

GARCIA, Valeria; GIRALDO, Omar Felipe. Redes y estrategias para la defensa del maíz en México. **Rev. Mex. Sociol**, Ciudad de México, v. 83, n. 2, p. 297-329, jun. 2021. Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032021000200297&lng=es&nrm=iso>. Accedido en: 20 dic. 2025.

GIMÉNEZ, Gilberto. Territorio, cultura e identidades: la región sociocultural. **Estudios sobre las Culturas Contemporáneas**, época II, v. V, n. 9, 1999.

GONZÁLEZ-CASANOVA, Pablo (coord.). **Historia y política de los campesinos latinoamericanos**. México: Siglo XXI, 1984.

GOTTMANN, Jean. **The significance of territory**. Charlottesville: University Press of Virginia, 1973.

HAESBAERT, Rogério. Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. **Cultura y Representaciones Sociales**, v. 8, n. 15, p. 9-42, 2013.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **I Censo de Población y Vivienda 1995**. Aguascalientes: INEGI, 1995.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **XII Censo General de Población y Vivienda 2000**. Aguascalientes: INEGI, 2000.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **II Censo de Población y Vivienda 2005**. Aguascalientes: INEGI, 2005.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **Censo de Población y Vivienda 2010**. Aguascalientes: INEGI, 2010.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **Censo de Población y Vivienda 2020**. Aguascalientes: INEGI, 2020.

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **Censo agrícola, ganadero y forestal 2022**: Chiapas. Aguascalientes: INEGI, 2023.

LEVY, Santiago. **Poverty alleviation in Mexico**. Washington: World Bank, 1991. (Working Paper n. 679).

MARTÍNEZ, Julieta. **¿Campesinos, indígenas y migrantes?** Articulación de distintos modos de producción en Los Altos de Chiapas. México: UAM–Juan Pablos Editor, 2021.

MARTÍNEZ, Julieta. Desarrollo rural y política pública: análisis crítico al programa Precios de Garantía. **Estudios Sociales: Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional**, v. 35, n. 66, p. 1-32, 2025.

MARTÍNEZ, Julieta; PELÁEZ, Óscar. Políticas asistenciales para rezagos estructurales: el caso de Chiapas. **Estudios Críticos del Desarrollo**, v. 4, n. 6, p. 121-147, 2014.

MORENO, Silvia I.; MARTÍNEZ, Julieta. Redes agroecológicas y solidarias para la autosuficiencia y seguridad alimentaria rural y urbana. **Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades**, n. 97-98, p. 39-63, 2025.

ORDÓÑEZ, Gerardo. **La política social y el combate a la pobreza en México**. México: UNAM/SEDESOL, 2002.

PALERM, Ángel. Antropólogos y campesinos. In: **Antropología y marxismo**. México: Editorial Nueva Imagen, 1978, p. 196.

REDFIELD, Robert. **The little community**; peasant society and culture. Chicago: University of Chicago Press, 1989 [1956].

TETREAUULT, Darcy V. La política social y los programas para combatir la pobreza en México: ¿oportunidades para quiénes? **Estudios Críticos del Desarrollo**, v. 2, n. 2, p. 41-74, 2012

VARGAS-HERNÁNDEZ, José G. El impacto económico y social de los desarrollos recientes en las políticas agrícolas y rurales e instituciones en México. **Agricultura, Sociedad y Desarrollo**, v. 2, n. 2, p. 97-122, 2005.

WARMAN, Arturo. **Los campesinos**: hijos predilectos del régimen. México: Nuestro Tiempo, 1974.

WOLF, Eric. **Los campesinos**. Barcelona: Labor, 1978 [1971].